

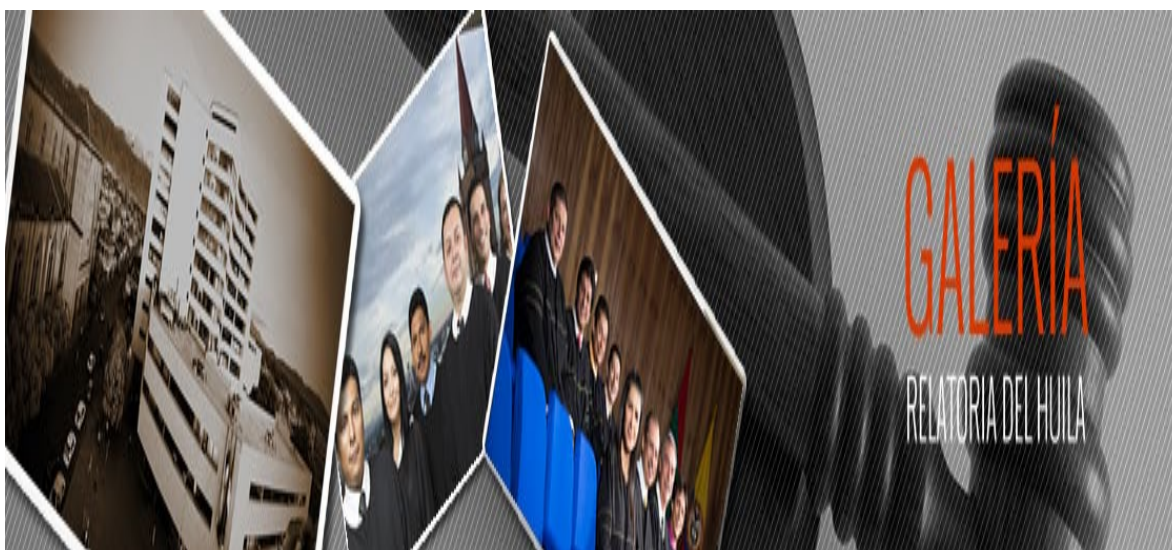


# **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA**

**BOLETÍN No. 3**

**MARZO**

**2021**



Tel. 8722638

Email: [relatoriatah@gmail.com](mailto:relatoriatah@gmail.com)  
[www.ramajudicialdelhuila.gov.co](http://www.ramajudicialdelhuila.gov.co)

# **MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA**

**BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**  
**Presidenta**

**JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**Vicepresidente**

**GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA**  
**Magistrado**

**JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**Magistrado**

**RAMIRO APONTE PINO**  
**Magistrado**

**JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**Magistrado**

**ENRIQUE DUSSAN CABRERA**  
**Magistrado**

# RESEÑA HISTÓRICA

La Relatoría del Tribunal Administrativo del Huila fue creada mediante Acuerdo No. 2078, (Art. 2º) de Septiembre 24 de 2003, del Consejo Superior de la Judicatura.

## MISIÓN

Recopilar, titular y sistematizar la información jurídica suministrada por los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, para que pueda ser consultada oportunamente por los usuarios internos y externos.

## VISIÓN

Apoyar permanentemente en su misión a los administradores de justicia y a la comunidad en general, estando a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

## FUNCIONES DE LA RELATORÍA

Las funciones del Relator del Tribunal Administrativo del Huila están precisadas en el Acuerdo No. 01 del 6 de Abril de 2011 de la Corporación, en el artículo 7º, destacando en lo que hace referencia a este tema, las siguientes:

- Recopilar, analizar y titular el documento jurisprudencial.
- Procesar la información.
- Facilitar a los usuarios un adecuado acceso a la información jurisprudencial



**Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** DIANA CRISTINA ORTÍZ LÓPEZ

**DEMANDADO:** ICBF

**RADICACIÓN:** 41 001 23 33 000 2016 00146-00

**FECHA:** MARZO 2 DE 2021

**CAMBIO NOMENCLATURA CARGO ICBF:** No hay violación principio de igualdad.

“33.-De otro lado, el Consejo de Estado<sup>8</sup> estudio la legalidad de los artículos 2 y 4 del Decreto 2489 de 25 de julio de 2006, por medio de los cuales se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del orden nacional, los cuales fueron demandados por considerar que todos los Defensores de Familia tenían el mismo perfil, es decir, se exigían los mismos requisitos, además de desempeñar las mismas funciones, por lo que a criterio de los demandantes, no existía una razón suficiente para que existan diferencias en códigos y grados y de contera en su escala salarial.”

(...)

“36.-Se concluye entonces que, si bien los requisitos y algunas funciones de los defensores de familia son similares, ello no implica que se configure una desigualdad, de tal suerte que quien alegue vulneración del derecho a la igualdad debe acreditar la existencia de un trato semejante a personas que se encuentren bajo unas mismas condiciones laborales para verificar una posible diferencia de trato injustificada.”

(...)

“41.-Si bien no existe discusión en cuanto a que la señora Diana Cristina Ortiz López ha estado vinculada en el cargo de Defensora de Familia código 2125 en los grados 9, 11, y 17 y que en efecto, en este último recibe una remuneración mayor, no obstante, no acreditó que en los grados 9 y 11 hubiera ejercido las mismas funciones que estando en el grado 17, pues solo indicó en su escrito de demanda y subsanación que los requisitos y funciones de todos los Defensores de Familia son iguales, sin acreditar este argumento.

42.-Como se indicó en líneas anteriores, respecto a la posición del Consejo de Estado y que esta Sala acoge, para aplicar el derecho a la igualdad en estos casos, no basta con señalar la existencia de similitud en las funciones del cargo de Defensor de Familia, pues la demandante debe acreditar que como Defensora de Familia Código 2125 Grados 9 y 11, ejercía las funciones correspondientes al cargo de Defensor de Familia Código 2125, Grado 17, lo que no ocurre en este caso.

43.-Si bien, las funciones para el empleo de defensor de familia se encuentran reguladas en el artículo 82 de la Ley 1098 de 8 de noviembre de 2006 y en la Resolución 1542 de 12 de julio de 2007, ello no supone que en todos los cargos serán ejercidas de manera uniforme, pues estas son proporcionales a las responsabilidades y a la asignación salarial

44.-Teniendo en cuenta que incumbe a la parte probar la presunta violación del derecho a la igualdad, conforme lo regula el artículo 167 del CGP, y no lo hizo, la Sala no encuentra desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo No. 12100-E-2015-319223-0101 SIM No. 1760453984 del 25 de agosto de 2015, que negó la solicitud de nivelación salarial y prestacional de la demandante como Defensora de Familia, Código 2125, Grados 09 y 11, con el cargo de Defensora de Familia, Código 2125, Grado 17, en los periodos correspondientes, por lo que se negará las pretensiones de la demanda.”

**FUENTE FORMAL:** Decreto 2737 de 1989/Decreto 1098 de 2006/ Resolución No. 1542 de 2007.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón, sentencia del 15 de agosto de 2013. Radicación: 190012331000200500458 01 (1035-2010). Actor: Celenith Calero De Domínguez./Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón, sentencia del 11 de julio de 2011. Radicación:

05001233100020062707 01 (0049-2012). Actor: Javier Alberto González Jiménez.



**Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**DEMANDANTE:** JUAN CARLOS RAMÍREZ Y OTROS  
**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL  
**RADICACIÓN:** 41 001 23 33 000 2015 00308-00  
**FECHA:** MARZO 2 DE 2021

**PROCESO DISCIPLINARIO MIEMBRO POLICÍA NACIONAL: Observancia de las formas propias del juicio.**

“76.-Cabe agregar que, tampoco se exige que en el proceso administrativo disciplinario se debe dejar constancia alguna del cambio del servidor público que conoce de la actuación, pues de conformidad con mandatos constitucionales, al prestar juramento de desempeñar las funciones que le incumben conforme la constitución y la ley y asume las responsabilidades y deberes que le competen establecidas en las mencionadas normatividades (Art. 122 C.P.)”  
(....)

“84.-Respecto de la valoración de la conducta subjetiva del investigado (que el demandante extraña, al tenor del artículo 170 de la ley 734 de 2002), en la segunda instancia, y que indica como falsa motivación, al interior del proceso disciplinario, a los investigados se les endilgaron conductas independientes que tuvieron una causa común y relación entre sí, por haberse sucedido en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no es falsa motivación del acto administrativo porque la realidad de la ingesta de bebidas embriagantes, como el uso del arma y la existencia del fallecido fueron hechos reales verificados y comprobados; además de la conducta del investigado que se le imputó a título de culpa gravísima, fue definida, si bien de manera generalizada en cuanto a que abarcó a los investigados, no quiere decir que la misma no se corresponda a la que efectivamente le era imputable y claramente se indica que el actor era el que le correspondía tal valoración.”

(....)

“92.-Para la Sala, al contrario de lo manifestado por la parte demandante, en el proceso disciplinario existió una valoración integral de las pruebas pues el fallador hizo uso de todos los medios que estimó pertinentes y conducentes para establecer la responsabilidad del disciplinado, lo que lo llevó a la conclusión que el señor Juan Carlos Ramírez Jurado no logró desvirtuar los cargos que le fueron endilgados, de tal suerte que estaba incurso en responsabilidad disciplinaria y, por ende, debían imponerse las sanciones que la ley establece por su conducta irregular, de tal suerte que se negarán las pretensiones de la demanda.

93.-Así las cosas las denominadas excepciones de legalidad de los actos demandados, Inexistencia del derecho y falta de fundamento jurídico para las pretensiones, fueron argumentos de la defensa, por ser hechos jurídicos inherentes a los actos que se pretendía anular, que surtieron efecto en el análisis realizado, no es necesario declarar su prosperidad, pues las pretensiones se denegarán.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 734 de 2002/ Ley 1474 de 2011/ Ley 1015 de 2006.

**NOTA DE RELATORÍA. Alguna de las sentencias citadas en esta decisión:** Radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación/



**Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA  
MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**DEMANDANTE:** MONICA MARCELA NAVIA BRAVO Y OTROS  
**DEMANDADO:** NACIÓN- MINEDUCACIÓN - FOMPREMA  
**RADICACIÓN:** 41 001 23 33 000 2016 00436-00  
**FECHA:** MARZO 2 DE 2021

**PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE AFILIADO A FOMPREMA: Requisitos-procedencia**

“54.-Como en el caso presente es más favorable la ley 100 de 1993, se aplicará en cuanto a pensión de sobrevivientes.

55.-Así las cosas, la Secretaría de Educación Departamental del Huila expidió certificación del tiempo de servicio prestado por la señora Navia Bolaños Alba Enelia a partir del 21 de diciembre de 1993 hasta el 17 de enero de 2005 en el nivel Básica Primaria, en propiedad por un período de 11 años, 0 meses y 26 días (fs. 38 a 39).

56.-Hasta el día 17 de enero de 2005 se desempeñó como docente en el

Triunfo ubicado en Pitalito Huila, Jornada completa (fs. 38), fecha en la que falleció conforme al respectivo registro civil de defunción, indicativo serial 5059476 de la Notaria Quinta de Neiva (fs. 37).

57.-Ahora bien, conforme lo establecido en la resolución 3799 del 24 de septiembre de 2013, los señores Luis Emiro Navia Navia y Aquilina Bolaños de Navia, en su calidad de padres de la docente fallecida petitionaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada en este acto administrativo, por no reunir los requisitos legales; resolución respecto de la cual solo procedía el recurso de reposición. (fs. 16 a 18).

58.-En esta resolución se indica en la parte motiva que “...según Resolución 256 del 29/03/2006 se reconoce y ordena el pago de una CESANTÍA DEFINITIVA, corregida con la Resolución 473 del 23/06/2006” y relaciona como beneficiarios de la citada prestación a Olmedo Bravo Navia, como compañero; Yeimi Yurani Bravo Navia, como hija mayor; y a Sergio Andrés y Mónica Marcela Bravo Navia, como hijos menores,

59.-Como quiera que, respecto de los señores Luis Emiro Navia Navia y Aquilina Bolaños de Navia, en su calidad de padres de la docente fallecida se les definió su reclamación de pensión en la citada resolución 3799 del 24 de septiembre de 2013 y a quienes se les vinculó en la audiencia inicial como terceros con interés directo y su manifestación se limitó a la de coadyuvar las pretensiones de la demanda, conlleva a que carezcan de legitimación sustantiva en la causa activa al no realizar petición alguna en favor de ellos ni la anulación del acto administrativo y así se declarará, por lo que se denegará la pretensión de anular la resolución 3799 del 24 de septiembre de 2013 en cuanto sólo a ellos afectó y no la demandaron.

60.-Como el 7 de junio de 2016 Mónica Marcela Bravo Navia y Sergio Andrés Bravo Navia, por medio de apoderado, solicitaron a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les reconociera la pensión de sobreviviente de su señora madre Ana Enelia Navia Bolaños, a partir del 18 de enero de 2005 (fs. 27 a 29) y mediante oficio fechado del 28 de junio de 2016, la Secretaría de Educación del Departamento del Huila respondió manifestando que dicha prestación ya había sido negada mediante resolución No. 3799 del 24 de septiembre de 2013, la cual fue notificada por edicto de fecha 13 de febrero de 2015, por la cual no procedía estudio de una nueva solicitud, esa decisión (contenida en el oficio) se torna en el acto administrativo que a ellos les negó el derecho reclamado.

61.-Como el número mínimo de semanas cotizadas por la docente Alba Enelia Navia Bolaños se encuentra superado al mínimo exigido en la ley 100 de 1993, como ya se dejó establecido, y Sergio Andrés Bravo Navia, quien nació en Pitalito el día 21 de diciembre de 1992, hijo de la citada docente Alba Enelia Navia Bolaños como se establece del registro civil allegado con la demanda (f 44) y Mónica Marcela Bravo Navia quien nació en Pitalito el día 1 de octubre de 1994, hija también de Alba Enelia Navia Bolaños, como se establece del registro civil allegado con la demanda (f. 43), tienen derecho a la pensión de sobrevivientes.

62.-Como Sergio Andrés Bravo cumplió los 25 años el 2 de diciembre de 2017 y Mónica Marcela Bravo Navia el 1 de octubre de 2019, para cuando falleció su señora madre, cumplían el requisito de ser menores de 25 años.

63.-Adicionalmente, Andrés Bravo Navia, para 2015 se hallaba

estudiando Administración de Empresas en el Politécnico Grancolombiano en la modalidad virtual (f.46) y Mónica Marcela Bravo Navia, para 2016 se hallaba estudiando Ingeniería Ambiental en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD (f.45).

64.-Como el literal c) del artículo 478 de la ley 100 de 1993 exige la condición de ser estudiantes y dependientes económicamente del fallecido, se infiere que para la época que falleció Alba Enelia Navia Bolaños, sus hijos en mención se hallaban en la educación básica y primaria, y por ende dependían económicamente de ella y no existe prueba alguna que desvirtúe tal hecho.

65.-Así las cosas, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente que reclaman, pero deberán demostrar ante la entidad que a partir de la mayoría de edad continuaron estudiando hasta cuando cumplieron los 25 años.

66.-El valor de la pensión deberá ser indexado conforme la matemática financiera que utiliza esta jurisdicción<sup>9</sup>, advirtiéndose que cada mesada debe ser actualizada a la fecha de pago y realizarse los descuentos que por ley corresponde.

67.- Respecto de otros los vinculados, los señores Olmedo Bravo Navia, Yeimy Yurani Bravo Navia, de un lado respecto del primero el apoderado no se pronunció y en relación con la segunda solamente se limitó a coadyuvar las pretensiones, sin que se hayan petitionado ni demostrado derecho alguno en favor de ellos ni la calidad que se indicaba tenían.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 48CP/ Ley 100 de 1993/ Ley 812/ Ley 91 de 1989/ Ley 33 de 1985/ Decreto 224 de 1972.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta **decisión:** C-1094 de 2003/ T-021 de 2009/ Sentencia del 17 de noviembre de 2017. Rad. No.19001-23-33-000-2014-00295-01(0603-17) C.P.: César Palomino Cortés demandante: Yanette Timaná Guerrero y otro; demandado: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.Subsección A. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 47001-23-33-000-2015-00286-01(0492-18). Actor: Dioselina María Salazar de Luna. demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.



**DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**MAGISTRADO PONENTE**



**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**DEMANDANTE:** ELIAS GARCÍA MALAGÓN  
**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL  
**RADICACIÓN:** 41-001-33-33-002-2018-00456-01  
**FECHA:** MARZO 19 DE 2021

**RECONOCIMIENTO Y PAGO PENSIÓN DE INVALIDEZ SOLDADO: De conformidad Ley 100 de 1993.**

“Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y entre ellos, a los miembros que prestaran el servicio militar, cuando por las autoridades médico-laborales propias se les determine una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50%.”

(....)

“Es pertinente señalar que, una de las características notorias de la regulación de la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a partir de los conceptos científicos de las autoridades médico laborales propias que tiene por ministerio de la Ley, lo cual, tiene pleno sustento, en que dicho sector está excluido del régimen general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993.”

Así las cosas, resalta la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez en la fuerza pública está a tono con la dispuesta en el régimen general de pensiones, al que se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad.”

(....)

“Así las cosas, en sede contencioso administrativa, el principio de favorabilidad solo puede analizarse cuando existen dos normas o una con diferentes interpretaciones, siempre y cuando todas estén vigentes, y el de retrospectividad, esto es, aplicar una nueva ley solo cuando el derecho se consolide en vigencia de esta nueva normativa, criterio que tiene un carácter vinculante frente a los jueces de esta jurisdicción y, por ende, no puede ser desconocido al decidir asuntos similares.

Ahora bien, tanto la demanda como la alzada persiguen que en virtud del principio de favorabilidad, al aquí demandante se le apliquen las disposiciones contenidas en el Régimen General de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993, por cuanto fue calificado con una incapacidad para laborar inferior al 75% para acceder a la pensión conforme al régimen especial para la fuerza pública, en tanto que la Ley 100/93 establece que se tiene el derecho a la pensión de invalidez si se demuestra un ICL menor.”

(....)

“En consecuencia, siguiendo estas claras orientaciones jurisprudenciales y los principios de favorabilidad, efectividad de los derechos sustanciales, a la seguridad social y la solidaridad, es claro que debe acumularse el tiempo de servicio destinado a la prestación del servicio militar obligatorio para efectos de acceder al reconocimiento de todas las prestaciones sociales, y entre ellas y con mayor razón, cuando sea el caso de la pensión de invalidez como consecuencia de la disminución de la capacidad sico-física y al amparo de lo previsto en la Ley 100 de 1993 o de otro régimen especial en los que se exija la efectiva realización de una cotización o aportes pensionales, en tanto que la sola acreditación de la prestación del servicio impone que la cuota parte correspondiente a ese tiempo de ese servicio está a cargo de la Nación (ya sea

a través del Ministerio de Defensa Nacional o de Hacienda y Crédito Público) con base en el salario mínimo legal mensual vigente.

De esta manera, tenemos que el demandante ELÍAS GARCÍA MALAGÓN, se vinculó e ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio militar obligatorio desde el 23 de noviembre de 1994 y hasta el 1° de enero de 1996, esto es, por un periodo de un (1) año, un (01) mes y ocho (08) días, correspondientes a 56.8 semanas aproximadamente.

De ahí que, contrario a lo afirmado por el a quo, el demandante si acreditó el número de semanas mínimas de cotización y con ello, cumplió con los requisitos legales y constitucionales necesarios para acceder y ser beneficiario de la pensión de invalidez contemplada en el régimen general, aun bajo la circunstancia de estar sometido al régimen especial de las Fuerzas Militares, siendo, sin lugar a dudas, procedente el reconocimiento por favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad, lográndose desvirtuar la legalidad de la Resolución No. 3296 del 9 de agosto de 2018, en cuanto negó al actor el reconocimiento de tal prestación.

Valga precisar que frente a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 4421 de 25 de octubre de 2018, por la cual se rechazó por improcedente el trámite de recurso de apelación contra la Resolución No. 3296 del 9 de agosto de 2018, la Sala considera que tal acto no constituye un acto definitivo susceptible de control judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y en todo caso, la parte actora no esbozó argumentos contra la decisión de la administración de declarar improcedente el recurso de apelación, para considerar que hay lugar a emitir pronunciamiento al respecto.

Así las cosas, como se desvirtuó la presunción de legalidad que revestía la Resolución No. 3296 del 9 de agosto de 2018, acto que resolvió la situación jurídica del aquí demandante, la Sala ordenará a la entidad reconocerle al actor la prestación pensional de invalidez en atención a grado de disminución de su capacidad sicofísica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Para el efecto, la liquidación del monto la mesada pensional atenderá los lineamientos descritos en el literal

a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993<sup>14</sup>, sin que en ningún caso el monto de la referida prestación pensional sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 48 y 53 CP/ Ley 100 de 1993/ Ley 923 de 2004/ Ley 860 de 2003/ Decreto 094 de 1989/ Decreto 1796 de 2000/ Decreto 4433 de 2004/ Decreto 1157 de 2014/

**NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** C- 428 de 2009/C-890 de 1999/ T-595 de 2007/ T-599 de 2012/ T- 516 de 2012/T- 063 de 2013.



**DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** GUILLERMO VIDAL PASTRANA

**DEMANDADO:** UGPP

**RADICACIÓN:** 41-001-33-33-009-2017-00256-01

**FECHA:** MARZO 05 DE 2021

**RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN: De conformidad Ley 6 de 1945.**

“Como puede verse, la Sección Segunda del Consejo de Estado no tiene una posición unificada respecto de cómo determinar el IBL del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. En ese orden de ideas, ante la diferencia de criterios al interior de las subsecciones A y B de la Sección Segunda y al no existir una sentencia de unificación sobre la materia, la Sala revisará el asunto bajo las normas que regularon la situación pensional del aquí demandante, y partir de lo probado en el expediente se resolverá el caso concreto.”  
(...)

“En este caso se encuentra demostrado que, al 13 de febrero de 1985, el señor Guillermo Vidal Pastrana tenía 43 años de edad y 22 años, 10 meses y 2 días de servicio, pues nació el 4 de junio de 1941 y se vinculó al Instituto Agropecuario Colombiano desde el 11 de abril de 1962. En consecuencia, el aquí demandante quedó amparado por el régimen de transición contemplado en la Ley 33 de 1985 por el requisito del tiempo de servicios, lo que implica que se hizo acreedor al derecho pensional previsto en la normatividad anterior a esa ley y vigente para ese momento, una vez cumpliera los 50 años de edad, esto es, con la edad prevista en la Ley 6ª de 1945.

Ateniendo la fecha de su nacimiento, el señor Guillermo Vidal Pastrana cumplió los 50 años de edad el 4 de junio de 1991 y por tanto, tiene derecho a la pensión de jubilación con las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, al cumplir 50 años de edad y 20 años de servicios, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso final “...Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.”

Sobre ese aspecto no existe discusión alguno, sino en establecer cuáles son las reglas para la liquidación y la tasa de remplazo de la prestación de demandante, pues se aduce que la misma debe realizarse en aplicación de la Ley 6ª de 1945 y de los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, esto es, con el 75% de todos los factores devengados en el último año de servicios, y al respecto debe señalar la Sala que, tal y como se precisó antes, el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, nada dijo sobre la forma como debía liquidarse la pensión de quienes se hallaren amparados bajo el régimen de transición en él contemplado, pues este remitió a la normatividad anterior únicamente en lo que atañe al requisito de edad para pensionarse.

En consecuencia, en este caso no es posible extender los efectos del régimen de transición a que alude el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 a aspectos del derecho pensional que no han sido regulados en dicha disposición y que bajo una interpretación que favorezca la situación particular del actor, las reglas para determinar el IBL en su caso deben ser las contenidas en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, por ser la normatividad vigente al momento en que el actor adquirió el estatus pensional, así se hallara en vigencia la Ley 100 de 1993.

Se acogerá el criterio señalado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de mayo de 2020, citada en acápite anterior, en cuanto precisa que la Ley 6ª de 1945 quedó derogada por la Ley 33 de 1985 y que sus mandatos

solo eran oponibles para quienes, siendo beneficiarios del régimen de transición de esta norma, consolidaran el derecho antes de entrar en vigor otra normativa, que en últimas fue la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para el caso del señor Guillermo Vidal Pastrana, el régimen anterior que produjo efectos jurídicos es la Ley 6ª de 1945, pero solo en lo atinente al requisito de la edad, aspecto que protege la transición del parágrafo 2 del artículo de la Ley 33 de 1985.

Por tanto, en cuanto a la forma de determinación del IBL, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que deben aplicarse los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, pues se insiste, el régimen de transición solo amparó el requisito de la edad y porque la situación del demandante encuadra en el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que acreditó el cumplimiento de los requisitos para pensionarse antes de la entrada en vigencia de este estatuto, y aun cuando su derecho no hubiere sido reconocido antes, la tasa de reemplazo y los factores de liquidación deben regirse por las reglas del actual sistema de seguridad social vigente al momento de adquisición del status pensional, esto es, las previstas en la Ley 100 de 1993. De manera que, en la determinación de la mesada pensional del aquí demandante, ha de concluirse que tiene derecho a que se liquide con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los fijar los aportes, pero del último año de servicio, siempre y cuando le resulte más favorable que liquidarla con los últimos diez años o fracción menor.

En este punto debe precisar la Sala que, si bien para el caso del señor Guillermo Vidal Pastrana, no resultan aplicables las condiciones de liquidación pensional a que alude el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si lo son las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado en sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, frente a los factores que deben tenerse en cuenta al momento de la liquidación de las pensiones amparadas bajo el régimen consagrado en la Ley 33 de 1985.

Lo anterior en razón a que en esa providencia, si bien se aludió al régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, lo cierto es que también se analizó la forma como debe interpretarse y aplicarse el régimen de pensiones consagrado en la Ley 33 de 1985, según el cual, para la liquidación de la mesada pensional, solo pueden incluirse aquellos factores sobre los cuales el empleado hubiere realizado aportes o cotizaciones, y que se encuentren legalmente señalados como partidas computables de la pensión, lo que además tiene sustento en la postura de la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, que precisan que, en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los descuentos.

De ahí que, en cuanto a los factores salariales que en virtud de la Ley 33 de 1985 deben componer la base de liquidación, solo pueden tenerse en cuenta los señalados en esta norma y la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se efectuaron aportes, y conforme a las pruebas obrantes en el proceso, de los factores devengados por el actor durante su último año de servicios –1º de enero al 30 de diciembre de 1999-, la norma en mención únicamente consagra como factores de liquidación de la pensión la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, los cuales fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada al momento de liquidar la base de la mesada pensional del aquí demandante, tal y como se advierte en la Resolución No. 0029993 del 19 de marzo de 1999, por la cual CAJANAL reconoció al actor la pensión de jubilación y en la Resolución No. 029578 del 30 de noviembre de 2000, que reliquidó la prestación por retiro definitivo del servicio.

No obstante, como en dichos actos administrativos se optó por liquidar la mesada pensional con el promedio de los factores que sirvieron de base a los aportes de los últimos cuatro años de servicios en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lugar de tener en cuenta solo los del último año de servicios, la Sala estima que debe acceder en este aspecto a lo pedido en la demanda, esto es, ordenar que se reliquidarse la pensión del señor Guillermo Vidal Pastrana, conforme a la Ley 33 de 1985, esto es, con los factores que hubiere realizado aportes pero los del último año de servicios.”

(.....)

“En consecuencia, deberá accederse parcialmente a las pretensiones en el aspecto indicado y por ello, se revocará la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que sí era viable reliquidar la pensión del aquí demandante con el promedio de los factores que sirvieron de base a los aportes en el último año de servicio comprendido entre el 1° de enero y el 30 de diciembre de 1999, pero solo con los factores sobre los cuales se efectuaron aportes, pues el régimen de transición contemplado en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 solo mantuvo sus efectos para el requisito de la edad.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 48 CP/ LEY 6 DE 1945/ Ley 4 de 1966/ Ley 62 de 1985/ 33 de 1985/ley Decreto 1045 de 1978.

**NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** C-789 de 2002/ C- 314 de 2004/ C- 428 de 2009/ C- 168 de 1995/ C- 258 de 2013.



**DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** MARÍA DEL CARMEN PUENTES CAMACHO

**DEMANDADO:** CASUR

**RADICACIÓN:** 41-001-33-33-003-2017-00293-01

**FECHA:** MARZO 05 DE 2021

**RECONOCIMIENTO Y PAGO ASIGNACIÓN DE RETIRO MIEMBRO POLICÍA NACIONAL:**  
**No cumple los requisitos para ser beneficiaria.**

“De conformidad con lo anterior se colige que los derechos a la seguridad social se predicen tanto de los cónyuges como de los compañeros (as) permanentes, y en ese sentido, corresponde reconocer el derecho a percibir la prestación social, ante la ausencia del causante por ende en caso de conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, debe valorarse el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho reclamado, así como la dependencia económica de las potencialmente beneficiarias<sup>2</sup>.

Por otra parte, debe destacarse que el Consejo de Estado<sup>3</sup> ha señalado que en materia de sustitución pensional no es posible aplicar retrospectivamente la ley posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, por cuanto la norma que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no otra posterior.”

(.....)

Además, a diferencia del vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan por la separación de facto, en tratándose de las uniones maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales, y por ende el compañero deja de pertenecer al grupo familiar. Lo anterior, según la jurisprudencia Constitucional constituye el único criterio que ha sido aceptado como legítimo para establecer diferencias entre cada uno de estos vínculos familiares (Sentencia C- 1035 de 2008).

Por último, el argumento sobre la afiliación a los servicios de salud de la Policía Nacional de la señora MARÍA DEL CARMEN PUENTES carece de relevancia probatoria, pues, la certificación que al respecto ha sido aportada por la demandante no suministra información notable sobre su relación afectiva con el causante y en todo caso tal afiliación obedece principalmente al vínculo matrimonial que desde el 2013 existía entre la demandante y el señor Miguel Ramírez Vargas (q.e.p.d.).

En ese orden, a partir de las pruebas documentales y testimoniales que obran en el proceso, se avizora que la señora MARÍA DEL CARMEN PUENTES CAMACHO no cumple los requisitos previstos por el Decreto 4433 de 2004 para ser reconocida como beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro otorgada a su cónyuge Miguel Ramírez Vargas (q.e.p.d.), dado que la comunidad de vida conformada por la pareja se desarrolló entre septiembre de 2013, fecha de su matrimonio, y junio de 2016, fallecimiento del agente retirado de la Policía, esto es durante aproximadamente 2 años y 9 meses, y no durante los cinco años previos a la muerte del causante. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 100 de 1993/Decreto 4433 de 2004/ Decreto 1213 de 1990.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: sentencia del 10 de mayo de 2018 proferida por esta subsección en el proceso 230012333000201400165 01 de la cual fue ponente la suscrita consejera./ en sentencia del 1º de marzo de 2018 proferida en el proceso con radicado interno 3713-2014, cuya ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter.



**Dr. RAMIRO APONTE PINO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** MAGDA PATRICIA TRONCOSO SUÁREZ

**DEMANDADO:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO  
PERDOMO DE NEIVA.

**RADICACIÓN:** 41- 001- 33 -33- 001- 2013-00436-01

**FECHA:** MARZO 2 DE 2021.

## **CONTRATO REALIDAD: Existencia relación laboral.**

“f.- Al declarar la existencia de una relación de carácter laboral, es necesario diferenciar las prestaciones asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.

Entre las que están a cargo del empleador se encuentran las ordinarias o comunes: las primas y las cesantías. Las que están a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social: salud, seguridad social, riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema, debe mediar una cotización.

Ante la presencia de un contrato de trabajo o cuando se ostente la calidad de servidor público, la cotización debe realizarla el empleador. En el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y por el empleado en forma compartida, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley. La cotización al sistema de pensiones es el 16% del ingreso laboral (75% por el empleador y un 25% por el empleado). La cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado, correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%6.”

(....)

“Así las cosas, no se puede colegir que actuara con independencia o que se sometiera simplemente a un régimen de coordinación. Por lo tanto, se infiere que se encubrió una relación de naturaleza laboral, y aunque es válido prestar servicios a través de los contratos referidos, solo se permite que sea temporalmente y no de manera indefinida (como sucedió en el sub lite); porque como ya quedara expuesto, la demandante laboró durante los años 2007 a 2012; desnaturalizándose la esencia de la contratación regida por la Ley 80 de 1993.

e.- Tomando como referente las anteriores consideraciones, infiere la Sala, que la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva encubrió una relación de naturaleza laboral, amparándose en un vínculo contractual; en consecuencia, se declarará la nulidad del oficio CC 111 del 24 de mayo de 2012 suscrito por el gerente de esa entidad; y el acto ficto derivado de la omisión en responder el recurso de reposición; y a título de restablecimiento del derecho se reconocerán las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de servicio; las cuales serán liquidadas con base en los honorarios que fueron pactados en los contratos de prestación de servicios.

f.- Ahora bien, está acreditado que la accionante laboró de forma ininterrumpida entre el 4 de mayo de 2007 y 30 de abril de 2012.

Teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales se radicó el 22 de mayo de 2012<sup>12</sup>; es evidente, que no operó la prescripción frente a los derechos prestacionales derivados de ese periodo. Siendo pertinente aclarar, que los aportes a pensión se deben cancelar al fondo de pensiones a las cuales se encuentre afiliada, y la entidad debe calcular el ingreso base, de acuerdo con los honorarios pactados, y únicamente en la cuota parte que le correspondía como empleador (si no se hubiera hecho). A su vez, la demandante debe cancelar el porcentaje que le corresponda, en caso de no haberlo hecho. Recordando, que de acuerdo con el H. Consejo de Estado, los aportes a pensión se deben girar al ente de previsión al que estuvo vinculada la demandante durante el tiempo que duró la relación laboral reconocida, sin que sea admisible ordenar el pago directo 14 (aunque lo hubiera hecho a título de contratista)<sup>13</sup>.”

h. -Como quiera que la declaratoria de la existencia del contrato realidad no le confiere a la demandante la calidad de empleada pública; no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de

las cesantías; porque dicha penalidad se causa cuando el empleador consigna las cesantías con posterioridad al 15 de febrero del año siguiente a su causación. Y en la medida en que solo con la ejecutoria de la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral se hacen exigibles los derechos laborales salariales y prestacionales (incluyendo las cesantías), es a partir de la ejecutoria de esta que surge para la entidad la obligación de pagarlas en los términos legalmente señalados<sup>14</sup>.

Bajo esta misma premisa, tampoco se accederá a la solicitud de reintegro o reincorporación al cargo de auxiliar administrativo; como quiera que dicho beneficio no puede reconocerse a quien no ha sido desvinculado de un empleo público.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 53CP/ Ley 80 de 1993/Decreto 1950 de 1973/Ley 734 de 2002.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:**

H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Radicación: 50001-23-33-000-2010-00606-01(1586-16)./ Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente N ° 1654-2000, Magistrado Ponente Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda./ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 23 de febrero de 2011. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00041-01(0260-09)/ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.





**Dr. RAMIRO APONTE PINO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** JOSÉ MARÍA CALDERÓN PEPICANO Y OTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL

**RADICACIÓN:** 41001333300120140061201

**FECHA:** MARZO 2 DE 2021.

**RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Conducción de vehículos-ejercicio actividad peligrosa.**

“En ese orden de ideas, considera la Sala que el señor Calderón Pepicano era el poseedor del vehículo siniestrado y se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar los perjuicios que aduce le fueron irrogados. En tal virtud, se ahondará en el análisis de las pretensiones incoadas.”

(...)

“La Sección Tercera del H. Consejo de Estado, considera que cuando el daño se deriva de la colisión de dos vehículos, el régimen objetivo resulta inoperante, porque en el hecho generador concurren dos actividades riesgosas de manera simultánea<sup>16</sup>. Siguiendo el precedente, a la Sala no le asiste duda que en los eventos en los cuales el daño haya sido producto de la concurrencia de dos actividades peligrosas, el régimen de responsabilidad será el subjetivo, fundado en la falla del servicio:

“[...] surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada [...]”<sup>17</sup>

En ese orden de ideas, es menester colegir que el régimen de responsabilidad aplicable no es el mismo en todos los casos, y depende de lo que se encuentre probado. Y siendo la falla en el servicio el único régimen aplicable en estos eventos, la exoneración de responsabilidad puede darse si se demuestra i) la diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, y/o ii) por hecho de un tercero, fuerza mayor, y/o culpa de la víctima.”

(...)

“e.- Tomando como marco de reflexión el anterior recuento normativo; considera a Sala que no existe duda que un miembro activo del Ejército Nacional (Ipia Maximiliano) desatendió las mencionadas disposiciones; como quiera que adelantó a otro vehículo en zona prohibida, y esa maniobra obstaculizó la movilidad e integridad de los ocupantes de los automotores que en ese momento se desplazaban por ese corredor vial;

causando la afectación material del camión en que se movilizaba el actor. Siendo pertinente resaltar que de acuerdo con el informe de tránsito “...presenta rotura, hundimiento y englobamiento en su parte anterior inferior y superior derecho e izquierdo, comprometiendo bomper delantero, capó y el sistema de enfriamiento del vehículo”.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 90 CP/CC/Ley 769 de 2002.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00342-01(17885) C.P. Dra. Myriam Guerrero de Escobar, Sentencia del 30 de noviembre de 2006, C.P. Alíer Hernández Enriquez, exp. 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16.827.. Posición reiterada en sentencia 8 de mayo de 2019. Radicación número: 68001- 23-31-000-2006-01049-01(46858)) C.P. Dra. María Adriana Marín/ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de junio de 2010; Exp. 19007/ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 26883. Tesis reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 5 de marzo 2020, exp. 05001-23-26-000-2007-02979-01(45380)/ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 20319.



**Dr. RAMIRO APONTE PINO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** CARLOS PONPEYO MENESES

**DEMANDADO:** UGPP

**RADICACIÓN:** 410012333000201700017010

**FECHA:** MARZO 2 DE 2021.

#### **RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA: Procedencia- requisitos**

“a.- La pensión gracia fue concebida por la Ley 114 de 1993 como una prerrogativa que la Nación le concede a un determinado grupo de docentes oficiales (maestros de primaria de carácter regional o local), que hubieran laborado durante 20 años (de manera continua o discontinua), tuvieran más de 50 años de edad, observaran buena conducta, carecieran de medios apropiados de subsistencia y no percibieran otra pensión o recompensa de carácter nacional.

Vale resaltar, que se considera que es un privilegio gratuito, porque la Nación realiza el pago y el docente no hace parte de su nómina.

Por mandato de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1993, dicha prestación se extendió a los profesores de las escuelas normales, inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria territoriales.

b.- Por importancia jurídica, el 21 de junio de 2018<sup>15</sup> el H. Consejo de Estado unificó la jurisprudencia relacionada con el reconocimiento de la pensión gracia; destacando que los docentes nacionales no tienen derecho a dicha prestación, que el tiempo laborado en esa condición no puede computarse para dichos efectos; además, que los territoriales y nacionalizados no se convierten en nacionales porque en el acto de vinculación intervenga un delegado del Ministerio de Educación (como miembro de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional), ni porque la financiación de los gastos de los fondos educativos regionales dependan de los recursos girados por la Nación. Resaltando que la calidad de docente territorial se prueba con los actos administrativos donde con claridad se demuestre esa calidad:(...)”  
(...)

“b.- Aunque en la información vertida en los medios de prueba reposan los actos de nombramiento efectuados por el Gobernador del Huila para los periodos comprendidos entre: el 7 de julio de 2004 y el 6 de julio de 2005, el 14 de septiembre de 2005 y el 10 de julio de 2006, el 27 de enero y el 12 de julio de 2014, el 12 de noviembre y el 8 de diciembre de 2013; no se acreditó que las plazas a ocupar (en cada uno de dichos nombramientos) fueran de las previstas por el legislador como territoriales (municipales, departamentales o nacionalizadas).

En tal virtud, de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio expedidos por la Gobernación del Huila y por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; es menester colegir, que durante los últimos de 6 años, 11 meses y 29 días, el demandante fungió en calidad de docente nacional; tiempo, que no puede computarse para efectos del reconocimiento pensional procurado.

Tomando como marco de reflexión el calificado parecer jurisprudencial al que se hiciera referencia en el acápite anterior, para la Sala resulta claro que Carlos Pompeyo González Meneses no satisface los requisitos legales para ser acreedor de la pensión gracia; amén de que no acreditó haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de 20 años.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 114 de 1993/ Ley 37 de 1993.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, D. C., Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinte (2020). Radicación Número: 27001-23-33-000-2015-00034-01(1595-18). Actor: Lucio Alipio González Asprilla. Demandado: Ugpp.



**DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** ANTONIO MARÍA SALGADO ALVARADO

**DEMANDADO:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MOMCALEANO  
PERDOMO DE NEIVA.

**RADICACIÓN:** 41 001 23 33- 000- 2015-00090-00

**FECHA:** MARZO 2 DE 2021

**RELIQUIDACIÓN CESANTÍAS EMPLEADO SECTOR SALUD: Son beneficiarios del régimen de retroactividad siempre y cuando no estén afiliados al FNA.**

“En este aspecto y para determinar o no la retroactividad de las cesantías en el sector salud, el Consejo de Estado en sentencias del 5 de abril de 20174 y 26 de abril de 20185, señaló que a pesar de que el servidor público se haya vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 10 de 1990 en el nivel territorial, si sus cesantías fueron consignadas al FNA de manera ininterrumpida, no le asiste el derecho a la liquidación con retroactividad, pues desde su vinculación optó por el sistema de liquidación anualizado.

Además, se afirmó que si no existe prueba que acredite la manifestación de su voluntad de acogerse a dicho sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales de sus cesantías directamente del FNA, permite inferir que el servidor conocía de su vinculación al aludido fondo y por lo tanto se acogió a las reglas y disposiciones que lo regulan y así, el criterio determinante es el hecho de que el servidor fue afiliado al FNA, independiente de la fecha de vinculación.

En caso contrario, en sentencia del 22 de marzo de 20186, se precisó que si el servidor público del sector salud del nivel territorial se vinculó antes de la Ley 10 de 1990, se afilió a un fondo privado de cesantías y además no existe prueba de que haya solicitado el cambio de régimen, debe aplicársele lo señalado en las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, al igual que el Decreto 1110 de 1947, es decir, el régimen de retroactividad de cesantías. En este evento, se aplicó como factor o elemento determinante la fecha en que fue vinculado y su afiliación a un fondo privado.”

(...)

Así las cosas, se concluye que los servidores públicos del sector salud del nivel territorial, que se hayan vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990 (10 de enero), por regla general, son beneficiarios en materia de cesantías del régimen de retroactividad siempre y cuando no se encuentren afiliados al FNA, pues como ya se indicó, con la afiliación a este fondo se entiende que pertenecen al régimen de anualidad.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 6 de 1945/ Ley 65 de 1946/ Ley 10 de 1990/ Ley 100 de 1993/ Ley 344 de 1996/ Ley 432 de 1998/ Ley 715 de 2001/ Decreto 2767 de 1945/ Decreto 1160 de 1947/ Decreto 3118 de 1968/ Decreto 1582 de 1998/ Decreto 1435 de 1998/ Decreto 306 de 2004.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C-687 de 1996/2 Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, exp.: 44001-23-33-000-2014-00138- 02(1228-16)/ Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, exp.: 47001-23-33-000-2015-00223- 01(4729-17).



**DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD ELECTORAL

**DEMANDANTE:** PROCURADURÍA 153 JUDICIAL

**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y O.

**RADICACIÓN:** 41 001 33 33- 008- 2020-00068-01

**FECHA:** MARZO 9 DE 2021

**ELECCIÓN PERSONERO DE CAMPOALEGRE: Acto que convocó a elección no fue demandado.**

“El trámite o procedimiento para dicha elección quedó regulada en la Ley 1551 de 2012 para señalar que requiere adelantar un concurso público de méritos; mismo que fue reglamentado por el Decreto No. 2485 del 2 de diciembre de 2014, compilado en el Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015 quedando así contemplados los estándares mínimos para la elección de personeros municipales (Título 27):”

(.....)

“En efecto, dicho acto administrativo estuvo precedido de unas actuaciones encaminadas a la postulación de entidades que pudieran asesora al concejo municipal en la elección de personero, por eso en él se señalaron las etapas del concurso, requisitos generales, requisitos mínimos de estudio, funciones del cargo, estructura del proceso, participación de la entidad universitaria seleccionada y demás, cuyo desarrollo estaría a cargo del concejo municipal y la Institución Tecnológica del Sur; quien además, conforme lo estipulado en el artículo 6° podría modificar y complementar en cualquier aspecto la convocatoria.

Más sin embargo, en la demanda presentada dicho acto no fue objeto de reproche alguno por parte de la actora, a pesar de haber sido el que dio apertura a todo el concurso público de méritos y es la norma reguladora del mismo, por manera que todas las inconformidades que se señalaron en la demanda y a lo largo del recurso en relación con la realización y etapas de dicho concurso, junto con las objeciones a la idoneidad de la entidad contratada para darle apoyo al órgano colegiado municipal, debieron proponerse mediante pretensión encaminada a la anulación dela Resolución No. 048 del 18 de noviembre de 2019 acumulando pretensiones dentro del presente asunto.

Al no haberse impugnado dicho acto y no tratarse de un acto complejo que implique su unicidad con el acto que declaró la elección, pues este es autónomo de aquél, no es posible para el tribunal extender los efectos de la anulación decretada por el a quo, a otros actos que no fueron objeto del litigio como se pretende con el recurso presentado, ello implicaría tomar una decisión por fuera de lo pedido y sería contraria a los postulados del debido proceso porque la demandada no tuvo oportunidad de defenderse y la congruencia porque excede lo pedido y lo probado.

En esa medida, al no haberse atacado la legalidad de la Resolución No. 048 del 18 de noviembre de 2019 (f. 81 a 109 Id), no es objeto del presente litigio y por ende, no es posible adelantar juicios de legalidad respecto del cumplimiento o no de los requisitos dispuestos por el concejo municipal para la ejecución de las obligaciones pactadas mediante el convenio celebrado para dicha convocatoria, ello habría sido posible si aquel hubiere sido tachado en su constitucionalidad y legalidad toda vez que dicha contratación dimanó de un acto administrativo regulador del concurso en donde se fijaron las condiciones del mismo y el papel de la institución de educación superior, por manera que como dicha resolución no se impugnó, goza de presunción de legalidad.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 313-8 CP/CPACA/ Ley 136 d 1994/ Ley 1551 de 2012/ Decreto 2485 de 2014/ Decreto 1083 de 2015/ Resolución No. 044 de 2019.

**NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:**

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez, 20 de marzo de 2013, radicación 11001-03-25-000-2009-00086-00(1108-09) y C.P. Victor Hernando Alvarado Ardila, 8 de marzo de 2012, radicación 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10).



**DR. JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** CAYETANO RAMÓN CARVAJAL

**DEMANDADO:** COLPENSIONES

**RADICACIÓN:** 41 -003- 33- 33- 003- 2019—0006- 01

**FECHA:** MARZO 23 DE 2021

**RELIQUIDACIÓN PENSION JUBILACIÓN: Improcedencia pretensiones.**

“El régimen anterior, para quienes habían laborado 20 años continua o discontinuamente como servidores públicos, estaba consagrado en la Ley 33 de 1985 (modificada por la Ley 62 del mismo año), para quienes su artículo 1° unificó la edad para pensionarse en 55 años para hombres y mujeres y estableció que la misma se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y tales factores los listó en su artículo 3° modificado por el artículo 1° de la Ley 62 del mismo año.

Dicha transición, por disposición del parágrafo 4° del A.L. 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Carta Política, quedó establecida hasta el 31 de julio de 2010, a excepción de aquellas personas que a 25 de julio de 2005 tuvieran cotizadas al menos 750 semanas pues se les mantendría hasta el 31 de diciembre de 2014.



En torno a dicha transición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 20182, precisó que el IBL no hace parte del mismo en la medida que el artículo 36 inciso 3° de la Ley 100 de 1993 dispuso lo pertinente para su fijación, por eso no hay razón para extender un tratamiento diferenciado y ventajoso en materia de IBL a los beneficiarios de dicha norma, pues lo contrario conduce a la concesión de beneficios manifiestamente desproporcionados, desconociendo los principios de solidaridad e igualdad y generando un desequilibrio financiero en el sistema.

Así las cosas y dando aplicación al precedente, se precisa que el IBL de las pensiones causadas con arreglo a la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, en virtud del régimen de transición que ella misma estableció en su artículo 36, debe ser calculado en la forma establecida en los incisos 2° y 3° del referido artículo, mas no en la normativa anterior y los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos para liquidar las pensiones en el sistema general de pensiones, listados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 19943, sin que el precedente anterior pueda ser acogido porque la naturaleza dialéctica de la sociedad hace que la jurisprudencia se adapte a las nuevas condiciones y especialmente cuando se unificó la interpretación del régimen de transición aquí debatido.”  
(....)

“Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra el Tribunal que la pensión del actor fue reconocida en las condiciones de edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo que señala la Ley 33 de 1985, por ser la norma que le resulta aplicable al cobijarle el régimen de transición, pero el IBL se obtuvo conforme a los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 en consonancia con los artículos 21 y 36 inciso 3° de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el promedio de los salarios que sirvieron de base para los aportes pensionales durante los últimos 10 años.

Así las cosas, la reliquidación deprecada es improcedente y las pretensiones no están llamadas a prosperar, pues los actos acusados no han desconocido la normativa invocada en la demanda y por lo mismo no se acogen los argumentos de la alzada, imponiéndose la confirmación de la providencia recurrida.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 100 de 1993/ Ley 33 de 1985/ Ley 62 de 1985.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C.P. César Palomino Cortés, exp.: 52001233300020120014301.



**Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** REPARACIÓN DIRECTA

**DEMANDANTE:** NOLBERTO RINCÓN Y OTROS

**DEMANDADO:** NACIÓN- MINDEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL

**RADICACIÓN:** 41-001- 33- 31 -006- 2008- 00218- 01

**FECHA:** MARZO 12 DE 2021

**RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-** Exceso uso de la fuerza en el uso de las armas- falla en el servicio.

“En este orden de ideas, la Sala encuentra que, aunque no se confirmó la pertenencia de Ruberney Rincón Casanova a una banda criminal o un grupo al margen de la ley, no hay ninguna prueba que señale que su muerte ocurrió en un contexto distinto al de un intercambio de disparos con miembros de la entidad demandada. No cabe pues colegir que se trató de un falso positivo, como lo manifestó el recurrente. Por el contrario, las pruebas testimoniales y las técnicas como el dictamen de necropsia o el dictamen sobre el arma hallada a Ruberney Rincón, traídas al proceso, indicaron que el fallecido no atendió el llamado de los integrantes del Ejército Nacional que patrullaban la zona con la finalidad de reestablecer la seguridad ante el actuar delictivo de una banda de delincuencia común, y disparó a los soldados, quienes respondieron para preservar sus vidas.

Por lo tanto, al no tener un indicio que permita establecer que los soldados pertenecientes a la Compañía Berlín del Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena” de Pitalito, el día 1 de marzo de 2007 simularan un enfrentamiento con el señor Ruberney Rincón Casanova, pues existen en el lugar de los hechos unas vainillas percutidas con un arma hallada cerca al cadáver de la víctima, que da lugar a establecer un posible intercambio de fuego, no puede concluirse de forma indiciaria que la totalidad de las declaraciones rendidas, pretendan ocultar la falta de un enfrentamiento.”

(.....)

“En suma, la Sala constató, con base en las pruebas aportadas al expediente, que no hubo un plan criminal por parte de los soldados para encubrir una ejecución extrajudicial, pues estos no se contradijeron en sus relatos y, evidentemente, no son testigos de oídas, pues participaron en los hechos que ocasionaron la muerte de Ruberney Rincón Casanova. Además, la información que aportaron sobre la Operación Mandril es idéntica a la consignada en el informe de inteligencia, la misión táctica y el informe de patrullaje.

No obstante lo anterior, el dictamen de necropsia precisa que la humanidad del señor Ruberney Rincón Casanova presentó dos disparos en sentido postero-anterior, es decir que los proyectiles ingresaron cuando al parecer el sujeto se encontraba a espaldas de las armas del Ejército Nacional, en ese sentido, como la base de la demanda y en el recurso de alzada se aduce la configuración de la falla en el servicio, se determinará si los uniformados de la entidad demandada incurrieron en ella, pero ahora por un presunto exceso en el uso de la fuerza.”

(....)

“De ahí que no pueda la Sala inferir a través de la prueba indiciaria, el hecho indicado, relativo a la existencia de un intercambio de disparos por un tiempo de 5 minutos entre los cuatro sujetos que se indica hacían parte de la delincuencia común, ya que la regla de experiencia relativa a que donde se presenta un combate armado y cruce de disparos de armas de largo alcance, en el lugar existirían más elementos relacionados con un intercambio de disparos que haya perdurado en el tiempo.

Al contrario, lo que se tiene como prueba indiciaria es que el sujeto de civil que resultó sin vida, intentó huir del lugar de los hechos al escuchar la proclama del Ejército Nacional, pues, los dos impactos en la humanidad de la víctima se presentaron en la espalda y dorso de su mano, acotando que un proyectil se fraccionó al interior del tórax y fue el que provocó la muerte.

De ahí que, establecido que los disparos que recibió la víctima fueron postero-anterior, se puede inferir que para tal momento se encontraba en huida.

En este orden, de los hechos indicadores, no encuentra la Sala la configuración de una prueba indiciaria más allá de las declaraciones los propios militares, de la existencia de un combate entre estos y cuatro personas por espacio de cinco



minutos, sino del hecho de que tan solo fue la propia víctima la que accionó su arma tipo escopeta calibre 12 y percutió las tres vainillas, lo que motivó la reacción de los uniformados de accionar sus armas de largo alcance.

Por lo que, bajo los mencionados indicios, se concluye que la entidad demandada el 1 de marzo de 2007, ante el mínimo accionar del presunto

delincuente y su posterior huida, emprendió fuego con los fusiles de largo alcance calibre 5.56 mm en contra del occiso, y siendo ello así incurrió en exceso en el uso de la fuerza, pues su reacción se tornó desproporcional, teniendo en cuenta que ya no era necesaria, en el entendido que el sujeto se encontraba huyendo de la escena de los hechos, además la calidad de las armas y el número de uniformados que se encontraban en la misión, los cuales ascendían a 13 servidores, superaban en todo sentido el posible ataque ocasionado por la víctima.

Es decir, que como el señor Ruberney Rincón Casanova presentó dos disparos en la parte posterior de su humanidad, es fácil concluir que ya no estaba efectuando accionar bélico en contra del Ejército, al contrario, por no tener las armas suficientes para hacer frente a la fuerza pública decidió emprender la huida, momento en el cual recibió los impactos de bala que le causaron la muerte.

Por lo cual, en ese sentido se declarará la responsabilidad del Estado, pues el daño además de ser antijurídico, en la medida que quien lo sufra no esté obligado a soportarlo, también se estableció el exceso de la fuerza en el uso de las armas, hechos constitutivo de falla en el servicio, pues las heridas que le fueron causadas con arma de fuego lo fueron al momento en que el mismo huía del lugar, pues fue impactado en la parte posterior de su humanidad.

Adicionalmente, solo fueron halladas 3 vainillas percutidas y los declarantes señalaron que los presuntos delincuentes emprendieron la huida, con lo que encuentra la Sala acreditado el exceso de fuerza dado que si bien los militares debieron reaccionar ante la agresión, lo cierto es que atendiendo las particularidades del caso, puede concluirse que la mencionada reacción resultó desproporcional a la cantidad de atacantes, a las armas empleadas por estos, al número de disparos realizados pero ante todo por cuanto al momento de los impactos la víctima se hallaba en huida, pues no de otra manera recibió los impactos que le cegaron la vía en la parte posterior de su humanidad.”  
(....)

“Partiendo del precedente jurisprudencial precitado, encuentra la Sala que, para establecerse la existencia de una legítima defensa, debe establecerse a través de los medios probatorios que el uso de las armas era el único medio posible para repeler la agresión inmediata, porque no existía otra forma o medio para contrarrestar el ataque y que en todo caso, la respuesta o reacción mediante el uso de las armas correspondía exclusivamente a la necesaria para repeler el injusto ataque, atendiendo a la gravedad del mismo.

En este orden de ideas, encuentra la Sala de los hechos probados y de la configuración de la prueba indiciaria, que efectivamente para el día de los hechos se cumplió por parte de un grupo de trece militares la ejecución de una operación militar y una vez recibieron la información de la presencia de delincuentes en la vereda Alto de Bellavista, el día 1 de marzo de 2007 hicieron presencia en el lugar a eso de las 23.00 horas, siendo atacados por unos sujetos, circunstancia que los obligó a accionar sus armas de dotación, lo que dejó como resultado la muerte del señor Ruberney Rincón Casanova.

Al respecto, si bien las razones que aducen los declarantes los llevaron a accionar sus armas, esto es los disparos que en su contra efectuaron algunos sujetos, no se encuentra acreditado en cuanto al número de los atacantes y la utilización por estos de armas de fuego de largo alcance, lo cierto es que los testimonios vertidos

concuerdan en señalar que, para el día de los acontecimientos fueron objeto de una agresión, mediante el empleo de armas de fuego, que como ya se señaló de la prueba indiciaria, puede tenerse por acreditado el actuar de la propia víctima mediante el empleo de un arma tipo escopeta, encuentra la Sala que si bien en principio la utilización de las armas por la fuerza pública obedeció a una injusta agresión, lo cierto es que igualmente puede señalarse que la reacción desbordó la exigencia de proporcionalidad en la reacción en la medida que se probó según la prueba indiciaria que solo se verificó el accionar de la propia víctima, lo que implica de suyo una desproporción en cuanto al número de involucrados y la clase de armas utilizadas, además que se probó que la víctima estaba huyendo del lugar, ya que los impactos hallados en el humanidad de la víctima fueron en la parte de atrás, por lo que se concluye que ya había emprendido la fuga.

En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditada como se refirió en precedencia el exceso de fuerza y por lo tanto la falla en el servicio que dará lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por el daño que reclaman los demandantes.”

(....)

“Por lo tanto, no encuentra la Sala probada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues el hecho de que la víctima se hallara en el lugar, junto a un arma de fuego tipo escopeta, no era imprevisible ni determinante para que en su contra se accionaran armas de fuego de largo alcance por un número plural de soldados, cuando se repite, se hallaba en huida y no se acreditó que otros actores accionaran armas en contra de los militares.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión apelada y en su lugar declarará la responsabilidad de la demandada Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en la causación del daño.”

**FUENTE FORMAL:** Art.90 CP

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** Radicación número: 68001-23-15-000-1997-13602-01(26956), consejero ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa/15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera -Subsección “B”-, sentencia del 19 de octubre de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 20001-23-31-000-1999-00274-01(21377), actor: Elida Rosa Carballo y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Tesis reiterada en Sentencia del 20 de marzo de 2018 Radicación número: 54001-23-31-000-2009-00167-01(53378)/ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de marzo de 2004, expediente 14.777 (R-0806), actora: Ruth Marina Bustamante. En el mismo sentido ver sentencias del 27 de noviembre de 2003, expediente 14.118 (R-0001), del 29 de enero de 2004, expediente: 14.222 (R-9852) y del 22 de abril del mismo año, expediente: 14.077 (R-9459).



**Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** CUMPLIMIENTO  
**DEMANDANTE:** SINTRADEPARTAMENTAL  
**DEMANDADO:** CNSC Y DEPARTAMENTO DEL HUILA  
**RADICACIÓN:** 41-001- 23- 33 -000- 2020- 00777-00  
**FECHA:** MARZO 12 DE 2021

**REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA: No hubo incumplimiento por parte de la CNSC y el Departamento del Huila.**

“Ahora, el Departamento del Huila en el escrito de contestación alega que la presente acción es improcedente por cuanto el requisito de la renuencia no se acreditó, por cuanto mediante oficio Oficio No. 2020CS039250-1 del 13 de octubre de 2020 se dio respuesta a la solicitud de cumplimiento de las normas sobre registro público de carrera administrativa que fuera radicada por la parte actora, manifestando que de conformidad con la sentencia C-372 de 1999 y el artículo 2.2.7.1. del Decreto 1083 de 2015 la única entidad competente para efectuar las inscripciones y/o actualizaciones en el Registro Público de Carrera, es la Comisión Nacional del Servicio Civil, y que el hecho que no comparta la respuesta no significa per se la renuencia.

Sin embargo, no se allega por el Departamento del Huila, comprobante de notificación del oficio en mención a la entidad accionada, que permita a la Sala acreditar que al momento de la presentación de la demanda (el 15 de octubre de 2020) e incluso a la fecha de emisión de la presente sentencia, la presidenta de SINTRADEPARTAMENTAL tuviera conocimiento de la referida respuesta.

En ese orden de ideas, el requisito de la renuencia por parte del Departamento del Huila se encuentra acreditado, el cual de conformidad con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, se configura bien cuando no se da respuesta en tiempo, o aún emitida en tiempo, resulte contraria al querer del peticionario al persistir en la negativa frente a la solicitud de cumplimiento de las disposiciones normativas.

Ahora, en relación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra acreditado que la parte actora, radicó el 28 de septiembre de 2020 al correo electrónico de notificaciones judiciales, copia de la petición de cumplimiento de los artículos 11, 12, 13, 15, 31, 34, 35, 45 y 54 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62, 86 y 87 del Decreto Ley 1227 de 2005 compilados en los artículos 2.2.6.25; 2.2.6.26; 2.2.7.1; 2.2.7.2.; 2.2.7.3; 2.2.7.4; 2.2.7.5; 2.2.7.6; 2.2.8.2.1 del Decreto 1083 de 2015, en cuanto al REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, sin que a la fecha se haya emitido respuesta alguna, configurándose así dicho requisito.”  
(....)

“Evidenciándose del material probatorio debidamente allegado, un trabajo coordinado entre el Departamento del Huila y la Comisión Nacional del Servicio Civil para la administración, la organización, la actualización y el control del Registro Público de Carrera Administrativa.

Así con la contestación de la demanda por parte del Departamento del Huila, reposa 143 folios<sup>27</sup> en los que se evidencian los oficios remisorios por parte de la Secretaría General de la Gobernación del Departamento del Huila, solicitando la inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de los empleados de la Gobernación del Huila ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como, los oficios expedidos por esta, solicitando la complementación de determinadas solicitudes por no contar con la documentación completa.

De igual manera, en el despacho mediante Auto calendado 30 de noviembre de 2021, previa solicitud efectuada por el señor Agente del Ministerio Público, dispuso el Decreto de pruebas, entre ellas, oficiar a la Oficina de Talento Humano o dependencia encargada de la Gobernación del Huila, para que, remitiera un informe donde conste el listado del personal de carrera actualmente vinculado y el estado actual de su vinculación indicando cargo y nivel, señalando la fecha del último movimiento y el número de oficio a través del cual se solicitó la inscripción o actualización del registro, en atención al artículo 176 de la Ley 393 de 1997.

Procediendo la Secretaria General de la Gobernación del Departamento del Huila, mediante oficio 2020CS049487-1 del 17 de diciembre de 2020 a emitir respuesta allegando 112 certificaciones de 112 servidores de la Gobernación del Departamento del Huila en el cual se indica el empleo, código y grado que desempeña con el número de Resolución de inscripción. Así mismo, se adjunta cuadro en el cual se encuentra la relación del personal de la Gobernación del Departamento del Huila y la última actualización de que fuera objeto en el Registro Público de Carrera Administrativa.

A su turno, como se indicara en el acápite 5.4.1. la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante oficio No. 20201400936191 del 19 de diciembre de 2020, respecto a la solicitud efectuada por el despacho sustanciador relacionada con el listado de servidores vinculados a la planta de personal del Departamento del Huila (alcaldías municipales, entidades descentralizadas, instituciones educativas, contralorías municipales) inscritos en el registro público de carrera administrativa, indicando la fecha de la inscripción o última actualización de cada registro manifestó: (...)

“Adjuntando en cuadro Excel el listado de los servidores del Departamento del Huila con anotaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, así como, las solicitudes radicadas entre el año 2019 y 2020 por los Jefes de Unidad Personal de todas las entidades del Departamento del Huila.

Informes que como se advirtió, se corrió traslado a las partes por el término de tres días conforme lo dispuesto en el artículo 277 del Código General del Proceso a través de auto calendado 12 de febrero de 2021 terminó que venció en silencio el 24 de febrero de 2021 según constancia secretarial del 25 de febrero de 2021, sin que por parte de la entidad accionante se realizara observación alguna, ni acreditara la existencia de inscripciones o actualizaciones pendientes por realizar por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil en coordinación con el Jefe de la Unidad de Personal de la Gobernación del Departamento del Huila en el Registro Público de Carrera Administrativa.

Así las cosas, no se observa incumplimiento alguno por parte de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC - y el DEPARTAMENTO DEL HUILA de los artículos 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62, 86 y 87 del Decreto Ley 1227 de 2005 compilados en los artículos 2.2.6.25; 2.2.6.26; 2.2.7.1; 2.2.7.2.; 2.2.7.3; 2.2.7.4; 2.2.7.5; 2.2.7.6; 2.2.8.2.1 del Decreto 1083 de 2015, en cuanto al Registro Público de Carrera Administrativa, razón por la cual, considera la Sala que las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de cumplimiento han de ser despachadas de forma negativa a los intereses de la parte accionante.

**FUENTE FORMAL:** Ley 909 de 2004/ Ley 1393 de 1997/ Decreto Ley 1227 de 2005/ Decreto 1083 de 2015.

**NOTA DE RELATORÍA.: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:** C-372 de 1999/ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de junio de 2016. radicación número: 25000-23-41-000-2015-02309-01(acu). Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez/Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.



**Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA**  
**MAGISTRADO PONENTE**

**ACCIÓN:** ACCIÓN DE TUTELA

**DEMANDANTE:** MARÍA DEL SOCORRO ARIAS AGENTE OFICIOSA  
MAURICIO ALIPIO GÓMEZ.

**DEMANDADO:** NUEVA E.P.S.

**RADICACIÓN:** 41-001- 33- 33 -005- 2021- 00027-01

**FECHA:** MARZO 25 DE 2021

**ACCIÓN DE TUTELA: No aportaron medios de prueba que determinen necesidad insumos solicitados.**

“En recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha reiterado su postura garantista y ha protegido los derechos fundamentales a la salud y vida digna de los accionantes, ordenando el suministro de pañales<sup>34</sup>, sobre todo si la patología que aqueja al accionante origina incontinencia urinaria.

Existe la suficiente claridad para entender que el suministro de pañales desechables no tiene una incidencia directa en la recuperación o cura de la enfermedad del paciente, pero sí va a permitir que la persona pueda gozar de unas condiciones dignas de existencia, en especial, en enfermedades que restringen la movilidad o que impiden un control adecuado de esfínteres<sup>35</sup>.

En este contexto la Sala coincide con el A quo, al echar de menos los elementos de prueba dentro del proveído, que permitan determinar el estado de salud del señor Juan Mauricio Alipio Gómez, pues no se aportó la historia clínica o epicrisis y las atenciones médicas derivadas con ocasión de éste que reflejen y permitan determinar la necesidad de los insumos solicitados, más exactamente, no se probó la incontinencia urinaria que se dice, padece el accionante.

En efecto, respecto al diagnóstico del paciente sólo obra el Formato de Control de consulta externa expedido por Mediláser S.A., del 5 de agosto de 2020 en el que el médico general indica como “impresión diagnóstica”: “trastorno afectivo bipolar, no especificado” y “Retraso mental, no especificado: otros deterioros del comportamiento” y determina como plan de manejo: “El próximo control es dentro de 30 días con la especialidad PSIQUIATRIA”.

Pese a que la agente oficiosa insiste en que se valore como prueba de la necesidad del suministro de los pañales, los requerimientos hechos mediante derechos de petición por parte del ICBF a la NUEVA EPS, solicitando la priorización en la entrega de medicamentos y pañales.

Aun cuando, dentro de la labor misional del Instituto Nacional de Bienestar Familiar – ICBF, se encuentra la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia<sup>36</sup>, para el caso de autos y en particular frente a la necesidad de aportar elementos de juicio que permitan la determinación del estado de salud de un paciente, dicha labor recae sobre el médico tratante, que para el caso sería el especialista en PSIQUIATRIA, que con base en sus conocimientos expertos, es quien tiene la idoneidad para establecer los tratamientos requeridos y la necesidad del suministro de los insumos solicitados – pañales – crema y pañitos húmedos.

Por tanto, al no existir certeza sobre de la condición de salud del señor Juan Mauricio Alipio Gómez y en concreto la incontinencia urinaria que se alega, padece el accionante, sumado al hecho de no contar con una prescripción u orden emitida por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo – pañales vitaminas, crema y pañitos húmedos, la Sala concluye al igual que el A quo, que no se cumplió con el lleno de los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional en cuanto al acceso a través del mecanismo de la acción de tutela a un servicio médico no incluido en el Plan Obligatorio de Salud – POS, como es el del presente caso.”  
(...)

“Así las cosas, habiendo sido catalogado como inviable el reconocimiento de tratamientos integrales contemplando posibles vulneraciones futuras a derechos fundamentales y siendo que dichas afectaciones a la fecha de análisis del presente caso, solo se muestran como meras expectativas y hechos inciertos, como se desprende de los análisis precedentes, la Sala encuentra ajustada a derecho la negativa de amparo determinada por el A quo.

2.6.5.-En este orden de ideas, como la orden emitida en la sentencia impugnada, se orienta al nuevo agendamiento virtual de la cita con el especialista en psiquiatría, quien deberá ponderar la necesidad el suministro del medicamento QUETIAPINA FUMARATO EQ. A QUETIAPINA TABLETA O TABLETA RECUBIERTA 200 MG Y RISPERIDONA DE 1mg, la Sala encuentra la necesidad de modificar la orden contenida en el numeral SEGUNDO, para que se incluya lo relacionado con el suministro de pañales, crema y pañitos húmedos, de conformidad con el criterio del especialista citado y se confirmará en todo lo demás el fallo impugnado.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 86 CP/Ley 1751 de 2015.

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: SU-391 DE 2016/ C- 313 de 2014/ T-465 de 20187/T-253 de 2018.



**Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**  
**MAGISTRADA PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**DEMANDANTE:** AMPARO MAYORCA DE MONJE  
**DEMANDADO:** NACIÓN- MINEDUCACIÓN - FOMPREMA  
**RADICACIÓN:** 41-0013- 33- 33 -008- 2019- 00072- 01  
**FECHA:** MARZO 5 DE 2021

**PENSIONADOS FOMPREMA: Descuentos aportes salud mesadas adicionales junio y diciembre.**

“En relación con lo anterior, se tiene que las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, señalaron que el monto de la cotización para salud sería del 12%, sin embargo, Ley 1122 de 2007 modificó el artículo 204 de la Ley 100, incrementando el monto de la cotización a salud al 12,5%, pero esta norma fue adicionada por el artículo 1° de la Ley 1250 de 2008, señalando que, la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sería del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

De lo dicho anteriormente se desprende que, si bien el numeral 5 del artículo 8° de la Ley 91 de 1989, estableció una obligación a cargo de los pensionados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de cotizar en cuantía del 5% de cada mesada pensional, incluyendo las adicionales, lo cierto es que ese porcentaje o tasa de cotización se incrementó al 12%, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en la Ley 1250 de 2008, quedando vigente la obligación de cotizar sobre todas las mesadas pensionales, incluidas las adicionales.

En este orden de ideas, la Sala considera que, contrario a lo manifestado por la parte actora, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no derogó el numeral 5 del artículo 8° de la Ley 91 de 1989, que consagra la obligación de efectuar aportes a salud sobre las mesadas adicionales, sino que, únicamente lo modificó incrementando el monto del porcentaje de cotización allí señalado, al mismo que consagra la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 1250 de 2008, pero manteniendo la obligación de cotizar sobre la totalidad de las mesadas adicionales.

En relación con lo anterior cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la Seguridad Social es un servicio público que se debe prestar con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en virtud de los cuales se debe garantizar la cobertura a todos los afiliados y/o beneficiarios y, a su vez, los cotizantes y las personas con capacidad de pago deben concurrir al financiamiento del sistema con el objeto de garantizar esa cobertura.

Por lo anterior, la Sala considera que la obligación de efectuar cotizaciones al sistema de salud, sobre las mesadas adicionales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se acompasa con los referidos principios constitucionales de universalidad y solidaridad en materia de seguridad social.”

(...)

“Por lo anterior, el Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo se excedió en el ejercicio de su potestad reglamentaria al expedir el citado artículo 1° del Decreto 1073 de 2002, en consecuencia, declaró la nulidad parcial del aparte tachado del parágrafo de este artículo citado anteriormente, quedando vigente únicamente la prohibición de hacer descuentos sobre la mesada pensional adicional de diciembre reglamentada por el artículo 50 de la Ley 100, pero no la prohibición de descuentos sobre la mesada de junio a que se refiere el artículo 142 de la misma Ley.



Pese a lo anterior se advierte que el Decreto 1073 de 2002, únicamente se refirió a los descuentos por concepto de obligaciones a favor de las organizaciones gremiales, asociaciones de pensionados, Cooperativas o Fondos de Empleados, y por concepto de cuotas a favor de las Cajas de Compensación Familiar para efectos de la afiliación, así como de las cuotas mensuales por el mismo concepto, más no a los descuentos por concepto de aportes salud, según se desprende de sus artículos 1° y 2°.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el aludido Decreto 1073 de 2002 reglamentó la Ley 71 de 1988, cuyo artículo 5° dispuso que “Las empresas, entidades o patronos que satisfacen pensiones, a solicitud escrita de la respectiva Asociación de Pensionados, deberán hacer los descuentos de las cuotas o totalidad de los créditos o deudas que contraen los pensionados organizados gremialmente en favor de su organización gremial”, lo cual ratifica que la prohibición contenida en ese Decreto de efectuar descuentos sobre las mesadas adicionales, no se refiere a los aportes a salud de los pensionados, sino a los créditos o deudas con las organizaciones gremiales a las cuales se encuentren afiliados.”

(....)

Así las cosas, se concluye que en el presente caso la señora Amparo Mayorca de Monje no tiene derecho a que se suspendan los descuentos por concepto de aportes a salud sobre las mesadas adicionales de la pensión, ni a que se le reintegren de forma retroactiva las sumas que le han sido descontadas por tal concepto, de modo que contrario a lo establecido por el a quo, quien señaló que los descuentos en salud solo se deben efectuar sobre la mesada de junio.

En consecuencia de lo anterior, habrá lugar a revocar la sentencia de primera instancia, para negar las pretensiones de la demanda, al argumentarse la tesis de la legalidad de los descuentos en salud en un 12% sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre, antes indicada.”

**FUENTE FORMAL:** Ley 4 de 1996/ Ley 91 de 1989/ Ley 100 de 1993/ Ley 238 de 1995/ Ley 1122 de 2007/ Ley 1250 de 2008/ Decreto 1848 de 1969/ Decreto 3135 de 1968/ Decreto 1073 de 2008.

**NOTA DE RELATORÍA. Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:**

C- 409 de 1994/ C-461 de 1995/9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2005, Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero (E), expediente: 11001-03-25-000-2002-00163-01(3166-02)/ Consejo de Estado, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2013, proceso No. 05001-23-31-000-1996-00659- 01, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.



**Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**



## **MAGISTRADA PONENTE**

**ACCIÓN:** CUMPLIMIENTO

**DEMANDANTE:** ESPERANZA LUGO TOVAR

**DEMANDADO:** COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

**RADICACIÓN:** 41-001- 33- 33 -001- 2020- 00240- 01

**FECHA:** MARZO 11 DE 2021.

**ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO: No se acreditó incumplimiento normas invocadas por parte de la CNSC.**

“Para el caso en concreto se advierte que el precitado requisito de procedibilidad se encuentra probado toda vez que la actora solicitó a través de memorial de fecha 28 de octubre de 2020, el cumplimiento de las normas objeto de la presente acción, frente a lo cual la Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta con oficio No. 20202120878321 del 16 de noviembre del 2020, constituyéndose así en renuencia; sin embargo, en cuanto a los restantes aspectos para la procedibilidad de la acción de cumplimiento se abordarán en el caso en concreto.”

(....)

“Descendiendo al caso en concreto, es necesario precisar que si bien, cualquier persona puede ejercer la acción constitucional prevista en la Ley 393 de 1997, para hacer efectivo el cumplimiento de leyes o actos administrativos que contengan una obligación clara y precisa en cabeza de las autoridades públicas o de los particulares en ejercicio de funciones públicas, ello no quiere decir que este mecanismo pueda ser ejercido para obtener del juez una orden dirigida a la autoridad administrativa para que reconozca un derecho o un beneficio que la parte actora crea tener a su favor o para que se establezca si determinada disposición debe aplicarse a una situación específica y concreta.

Como se mencionó uno de los requisitos para solicitar el cumplimiento de una norma o acto administrativo, es que el mandato sea imperativo e inobjetable, que la orden contenida en la norma sea precisa, clara y actual; y que esté radicada en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento.”

(....)

“Al respecto, para la Sala no se observa incumplida la norma invocada, dado que el deber expreso para la entidad demandada que se contiene en la misma, se contrae a que una vez en firme las listas de elegibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, comunicará a cada entidad la firmeza de los actos administrativos por medio de los cuales se conforman las listas de elegibles, y los publicará en la página web.

En ese sentido, se observa que, en efecto, la Comisión Nacional del Servicio Civil, comunicó la firmeza de las listas de elegibles y la publicó en su página web, conforme se señaló en el acápite de hechos probados.

Se tiene además que, para el caso, se presentaron 3 solicitudes de exclusión de la lista por parte de la Comisión de Personal del SENA, las cuales fueron resueltas por la CNSC, resaltando que la solicitud referente al señor José Arlez Rojas Peña fue considerada improcedente, por lo que no hubo lugar a modificación alguna frente a la lista de legibles, en lo que respecta a las otras dos solicitudes de exclusión, se inició la actuación administrativa para su estudio, resultando excluida la señora Isabel Moica Barragán, quien había ocupado el segundo lugar, y se decidió no excluir a la actora, señora Esperanza Lugo Tovar, quien había ocupado el cuarto lugar, por lo que se publicó la firmeza de la lista respecto de los puestos 3

y 4, conforme se puede observar en la página web de la Comisión, circunstancia que como señala la normativa transcrita, se realiza con fines informativos, en razón a que la firmeza de estos actos administrativos opera de pleno derecho, una vez se encuentren ejecutoriadas las decisiones, como en efecto ocurrió en el caso que nos ocupa.”

(.....)

“Es así como debe entenderse que la lista de elegibles se recompone automáticamente, tal como lo indica el artículo 57 de Acuerdo, ya transcrito, en donde se reitera, no hay necesidad de volver a enumerar las ubicaciones de los elegibles o rehacer la lista, pues esta, se itera, se recompone automáticamente.

Lo anterior, quiere decir que no hay necesidad de emitir acto administrativo que cambie los puestos de cada elegible, porque la recomposición de la lista de legibles se entiende efectivizada de manera automática, una vez se han emitido los actos administrativos que resuelven las situaciones administrativas que se hayan podido presentar, como en este caso, la exclusión de uno de los miembros de la lista de elegibles.

En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta, que no se acreditó por parte de la accionante el incumplimiento de las normas y que fuera necesaria la intervención del juez a efectos de hacer efectivo su cumplimiento en aras de garantizar la protección de derechos de carácter general.”

**FUENTE FORMAL:** Art. 87CP/ Ley 393 de 1997.

**NOTA DE RELATORÍA: Algunas de las sentencias citadas en esta decisión:**

Sentencia de 2 de octubre de 2003, radicación 25000-23-24-000-2003-1071-01(ACU).En este mismo sentido pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado Sentencias ACU-992 de 29 de octubre de 1999, ACU-1741 de 19 de enero de 2001, ACU-803 de 8 de agosto de 2003. Consejo de Estado, sentencias Acu – 020 del 17 de septiembre de 1997; Acu 1082 de 9 de diciembre de 1999. Así mismo, CONSEJO DE ESTADO, SECCION QUINTA Consejero ponente: MAURICIO TORRES CUERVO. Sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012) Radicación número: 25000-23- 24-000-2012-00773-01(ACU).Corte Constitucional, sentencia de 29 de abril de 1998, expedientes núm. D-1790, D-1793, D-1796, D-1798, D-1808, D-1810, D-1816, D-1817 y D-1819, actor: Francisco Cuello Duarte y otros, Magistrados Ponentes, Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.



**Dra. BEATRÍZ TERESA GALVIS BUSTOS**  
**MAGISTRADA PONENTE**

**ACCIÓN:** NULIDAD ELECTORAL

**DEMANDANTE:** ELECCIÓN CONCEJALES MUNICIPIO DE IQUIRA (H)

**DEMANDADO:** EDUARDO QUINTERO CHILA Y OTROS

**RADICACIÓN:** 41-001- 23- 33 -000- 2019- 00535- 00

**FECHA:** MARZO 12 DE 2021.

**ELECCIÓN CONCEJALES MUNICIPIO DE ÍQUIRA (H): Diferencia no justificada en formularios E-14 y E26- se dejaron de contabilizar votos.**

En este sentido la Sala Electoral del Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado: “Los pormenores que ofrece el formulario E-24 permite a los interesados y desde luego al juez electoral, establecer si la información allí reportada es fiel trasunto de lo escrutado por los jurados de votación en los formularios E-14. Cuando no hay coincidencia entre los votos reportados frente a una determinada opción política, surge un indicio de falsedad que solamente puede configurarse como tal si examinadas las actas generales de escrutinio no se halla constancia de que el cambio obedece a una corrección o a un recuento legalmente autorizados, cambio que en las circunstancias actuales también puede ser fruto de actuaciones del CNE. Es decir, que si no hay una justa causa que sustente la disparidad, el caso se debe tener como una falsedad.”

Por manera que, cuando de la comparación de las actas E-14 con la correspondiente E-24 emane una diferencia, ésta debe encontrar su sustento en el acta general de escrutinio, en la cual debe constar las razones por las que se modificaron los guarismos del E-24 frente al E-14. De no encontrarse el mentado sustento, deviene en irregular la votación y por ende corresponderá proceder a su corrección en virtud del mandato legal establecido en el artículo 275.3 de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo, se advierte que, para la prosperidad de la nulidad pretendida por esta causal no basta con demostrar la existencia de la falsedad en los documentos electorales, sino que se requiere que la modificación sea de tal magnitud que afecte sustancialmente los resultados de los escrutinios, es decir, que se alteren o cambien; dicho de otra manera, que los haga mutar al punto que sean otras las personas que resulten elegidas, al respecto el Consejo de Estado precisó: (...)

“Precisa la Sala que el partido Conservador Colombiano para el Concejo de Iquira en el periodo de 2020-2023, obtuvo dos curules, las cuales fueron ocupadas por Olga Lucia Toro Trujillo, por obtener un total de votos de 183 y Eduardo Quintero

Chila al acreditar 171 votos, sin embargo, el demandante ocupó la tercera ubicación porque según el formulario E24 consiguió 169 votos.

En ese orden de ideas, se tiene que si en el formulario E24 se hubiera consignado la totalidad de votos a favor del señor César Augusto Anacona Velásquez, el actor tendría 179 votos, lo que lo posicionaría sobre el candidato Eduardo Quintero Chila, quien como ya se dijo, acreditó un total de 171 votos.

En consecuencia, para la Sala, se cumplió con el requisito de incidencia en los votos, pues de corregir los yerros anotados en los formularios E24 y E26CON, respecto al señor César Augusto Anacona Velásquez, se variaría la elección del demandado como Concejal del municipio de Iquira.”

(....)

“Por lo expuesto, la Sala acogerá la tesis expuesta por la Representante del Ministerio Público y de la parte actora, puesto que las diferencias entre los formatos E-14 y E-24 no encuentra ninguna justificación, y de aplicarse los votos del primer formato, el actor tendría una votación superior al demandado, y por tanto, sería electo como Concejal del Municipio de Iquira para el periodo 2020-2023.

Ahora bien, el apoderado del señor Eduardo Quintero Chila señaló que se debían negar las pretensiones de la demanda, en el entendido que el actor no efectuó reclamación ante la autoridad electoral, previa a instaurar la presente demanda.

Al respecto, precisa la Sala que dicho argumento ya fue resuelto en auto del 1° de julio de 2020, al momento de resolver las excepciones previas propuestas, no obstante, recuerda la Sala que la exigibilidad de este presupuesto de la reclamación previa para la alegación de causales objetivas en el marco de los procesos electorales no se presenta como necesaria, porque en la actualidad, no existe norma estatutaria que dote de eficacia normativa la disposición constitucional del Acto Legislativo 01 de 2009, determinando las situaciones en que los cuestionamientos proceden ante las autoridades electorales y el procedimiento que debe seguirse.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-283 de 2017 declaró la inexequibilidad del numeral 6° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el cual contenía la obligación de presentar reclamaciones ante la entidad electoral, con el fin de instaurar la demanda de nulidad electoral, sobre el particular indicó “que, de acuerdo con la normatividad vigente, a parte de la inconstitucionalidad derivada del desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, el funcionamiento de la reclamación previa como requisito para acceder a la justicia resulta inconstitucional”.

(....)

“Conforme lo expuesto, el problema jurídico se resolverá en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda, al encontrarse una diferencia no justificada en el formulario E-14 en relación al formulario E-24, en el sentido que se dejaron de contabilizar 10 votos a favor del señor César Augusto Anacona Velázquez, los cuales le otorgan el derecho a ser electo como Concejal de Iquira en el periodo 2020-2023.

Por lo tanto, se declarará la nulidad parcial de los formularios E24 y E26 derivados de las votaciones efectuadas el 27 de octubre de 2019, respecto al Concejo municipal de Iquira para el periodo 2020-2023, en lo atiente a la elección del señor Eduardo Quintero Chila como concejal de dicho ente territorial.

En consecuencia, se declarará la elección de César Augusto Anacona Velázquez candidato No. 002 del Partido Conservador Colombiano, como Concejal del municipio de Iquira para el periodo constitucional 2020-2023.”

**FUENTE FORMAL:** CPACA/

**NOTA DE RELATORÍA:** Algunas de las sentencias citadas en esta decisión: C-283 de 2017/ Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Darío Quiñones Pinilla. Rad. No.: 11001-03-28- 000-2001-0009-01(2477). Actor: Juan David Duque Botero/17 Rad. 2018-00060-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Demandados: Representantes a la Cámara por Bogotá D.C., periodo 2018-2022./ Rad. 2018-00038-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Demandados: Representantes a la Cámara por el Departamento del Cauca, periodo 2018-2022./ Rad. 11001-03-28-000-2018-00035-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Demandados: Representantes a la Cámara por el

Departamento de Antioquia, periodo 2018-2022./ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 19001-23-33-000-2019-00377-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto de 5 de marzo de 2020./ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 17001-23- 33-000-2020-00014-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Auto de 22 de octubre de 2020.

## **NOTA DE ADVERTENCIA**

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado con los textos originales ubicados en la Secretaría del **Tribunal Administrativo del Huila**.

## **CONTÁCTENOS**



**María Piedad Vásquez Borrero**  
**Relatora**

**Tel. 8722638**

**Palacio de Justicia Neiva- Huila**  
**Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108**

**Email:** [relatoriatah@gmail.com](mailto:relatoriatah@gmail.com)

[www.ramajudicialdelhuila.gov.co](http://www.ramajudicialdelhuila.gov.co)

